



ARG- Un modelo que consolida la desigualdad y la marginación estructural como telón de fondo de las amenazas a los que luchan

PRENSA DE FRENTE :: 30/08/2005

Prensa De Frente

Dibujo: Carlos Julio, APENOC

Gentileza para **Prensa De Frente**

Las amenazas públicas del presidente a los enfermeros del Hospital Garrahan y la represión a los desocupados **que siguen protestando**, constituyen un hecho claro de ataque a los trabajadores y sectores excluidos de la sociedad. Sin embargo, esas acciones, en sí mismas, no explican del todo la gravedad de las políticas antipopulares que está llevando adelante un gobierno que, paradójicamente, para algunos sigue siendo digno de ser calificado como “progresista”.

De la mano de las agresiones verbales y los avances represivos, las decisiones de política económica que se aplicaron en los dos años y pico de gestión de Néstor Kirchner complementan el panorama, y permiten comprender que la situación para los sectores populares es mucho más grave que la posibilidad latente de que algunos referentes piqueteros sean encarcelados, como propone el ministro Fernández.

Es que detrás de las agresiones a los huelguistas del Garrahan hay una política laboral y salarial regresiva, que en concreto produjo que en los dos años de gestión se agrandara la brecha entre ricos y pobres. El gobierno intenta enmascarar esta realidad anunciando algunos aumentos salariales esporádicos y puntuales, pero mientras los trabajadores incrementan un 30% en promedio sus ingresos, los precios suben un 65% (89% en el caso de los productos de la canasta básica alimentaria) y las ganancias de los sectores empresariales y especulativos se amplían en casi un 80% en los últimos años. Resultado: los trabajadores reciben algunos pocos billetes más a fin de mes, y sin embargo su poder adquisitivo en la sociedad empeora.

Más grave aún es la situación de los millones que siguen excluidos del sistema laboral: mientras las noticias de niños que se mueren desnutridos en un país que produce alimentos para diez veces su población no dejan de ser frecuentes, el gobierno (y los grandes medios cómplices: ¡todos!) pregonan que todo está mejor. Montan un discurso orientado a convencer a la sociedad que en este país no trabaja el que no quiere, y explican que la protesta es fruto de revoltosos que deberían ser encarcelados. La ofensiva político-económica contra la franja social más excluida es brutal: la propuesta del Estado para una familia que quedó empujada a la indigencia después de una década de neoliberalismo (que por lo que se ve, continúa), es **un plan social de 150 pesos, menos de un 10% de lo necesario para cubrir una canasta básica** que permita pensar en tener acceso a una vida digna. Los índices de desocupación se mantienen alarmantes (para quien quiera leer, sirven hasta los propios números del INDEC: 15,8% incluyendo a quienes cobran planes sociales):

más de cuatro millones de personas, es decir, de familias que no pueden garantizar un ingreso mínimo!. Pero los números son sólo indicadores genéricos: deberíamos hacer el ejercicio de imaginarnos a esas cuatro millones de personas para entender la real dimensión del problema: una de ellas puede ser María, del asentamiento La Esperanza, con 4 hijos y sin marido, que vive en un rancho de chapa, ¿de qué puede trabajar? José fue tornero y está sin trabajo hace 8 años, pero ya tiene 48, ¿quién lo va a contratar? Esteban tiene 28, apenas terminó los estudios pero nunca consiguió un trabajo, no tiene calificación, ¿dónde se inserta?... ¡Cuatro millones de casos así!. Sin embargo el gobierno elige **destinar los millones del superávit a “desendeudarse”, eufemismo cínico con el que denominan a la política subordinada de pago religioso al FMI**, y a la no menos escandalosa campaña electoral... También elige el gobierno anunciar que para María, José, Esteban y los otros millones, no habrá nada. O peor, más marginación: desde el ministerio de Desarrollo Social ya anunciaron que además de no aumentar el monto de los planes sociales, lejos de la universalización de esta ayuda, seguirán los recortes en los padrones de beneficiarios.

Para otro momento quedará el análisis sobre las limitaciones de las organizaciones populares que, ante esta ofensiva, no han sabido oponer una resistencia más firme y consecuente: la cooptación de algunos grupos tras un proyecto que beneficia a los dirigentes que se suman al aparato del Estado pero perjudica a sus bases sociales seguramente explique parte del problema, pero sólo parte: las divisiones y falta de madurez política entre los que resisten, y la fractura social entre quienes sufren este deterioro económico-social y las capas medias que ven en parte superada la crisis, seguramente sean otros costados del problema.

https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/arg-un-modelo-que-consolida